



EL CAMBIO RADICAL DE MEDELLÍN

Frente a una serie de éxitos de la izquierda en los Andes, con la elección de populistas radicales en Venezuela, Bolivia y Ecuador, la derecha puede ufanarse de un triunfo espectacular. Medellín, la ciudad más conservadora de Colombia, el país más conservador del continente, ha experimentado un *boom* sensacional durante los últimos años. El índice de construcción de grandes edificios sobrepasa ahora el de Los Ángeles y Nueva York juntos. Desde 2002 la profusión de torres de apartamentos, hoteles de lujo, supermercados y centros comerciales quita el aliento. Las mayores corporaciones del país y más de setenta empresas extranjeras, entre ellas Phillip Morris, Kimberly Clark, Levi Strauss, Renault, Toyota y Mitsubishi, tienen ahora su cuartel general colombiano en Medellín. En 2005 se inauguró un centro de congresos de cerca de 3.000 metros cuadrados en el que se vienen celebrando anualmente más de una docena de conferencias internacionales, que generan más de 100 millones de dólares en inversiones y tratos comerciales. La industria de la moda de Medellín sólo es inferior ahora a la de São Paulo; su sector médico está la cabeza de América Latina en trasplante de órganos, investigación del SIDA y del cáncer. Un parque-museo muy elegante en el centro la ciudad, que ha sustituido al viejo mercado al aire libre y al distrito contiguo donde se ejercía la prostitución, aloja las obras del renombrado artista de Medellín de fama mundial Fernando Botero, mostrando sus esculturas en una vasta exposición al aire libre.

En 2005 la televisión colombiana emitió una versión local del programa estadounidense «Extreme Makeover» [Cambio Radical], en el que los participantes se someten al bisturí del cirujano plástico y reaparecen con un aspecto radicalmente nuevo. La popularidad de ese programa en Medellín reproducía la propia transformación de la ciudad durante el último quinquenio. Medellín es una ciudad saturada de medios de comunicación, muy consciente de su imagen, dominada por las relaciones públicas y en la que abundan las vallas publicitarias, por lo que resulta imposible eludir el mensaje, proyectado por portavoces de toda laya, de que Medellín está mejorando a una velocidad vertiginosa. Con la consolidación de un pacto de facto entre las fuerzas narco-paramilitares de derechas, por un lado, y un gobierno municipal de centro izquierda volcado en los medios

de comunicación, por otro, el propio Medellín ha sufrido una serie de operaciones cosméticas tan drásticas como los participantes en «Cambio Radical». Durante la década de 1980 la ciudad era conocida como reducto del cártel de Medellín del cabecilla del narcotráfico Pablo Escobar, y estaba a la cabeza del número de homicidios en todo el mundo: entre 1990 y 2002 fueron asesinadas en Medellín 55.000 personas, principalmente jóvenes. La velocidad del cambio ha sido asombrosa, incluso para el capitalismo de la cocaína: la tasa de homicidios en la ciudad se ha dividido por seis, y en 2005 era notablemente más baja que las de Detroit, Baltimore o Washington¹. Como guirnalda de todo ello, en 2006 el aventajado nativo de la ciudad Álvaro Uribe Vélez obtuvo en las elecciones un segundo mandato como presidente de Colombia tras lograr que se aprobara la necesaria enmienda de la Constitución nacional. Lo que sigue es un intento de entender la naturaleza de la cirugía plástica que ha dado lugar al nuevo aspecto de Medellín analizando la evolución de las bandas de jóvenes, los negocios de la cocaína, los guerrilleros de izquierda y los paramilitares en la transición a una economía de servicios.

Del oro al café

El papel de Medellín como capital de la reacción en América Latina –y como fuerza motriz de la política de Uribe– sólo se puede entender en relación con su lugar tradicional en la historia del país. Sus peculiaridades actuales reflejan pautas de formación regional, de clase y racial heredadas de los últimos dos siglos. Medellín está situada en un amplio valle andino, con cadenas de montañas al este y al oeste, en la provincia de ranchera y cultivadora de café de Antioquia, donde está muy arraigada una Iglesia católica profundamente conservadora. Fundada en torno a la minería del oro y como centro comercial en 1675, se convirtió en capital comercial de la región a finales del siglo XVIII; sus comerciantes se beneficiaban de la exportación del oro obtenido por esclavos en las minas y de la importación desde España de productos manufacturados baratos. Durante la década de 1880 la región se convirtió en centro del *boom* del café, que vinculó más estrechamente a Medellín con su entorno rural: los banqueros comerciales de la ciudad controlaban el crédito, la fijación de precios, la distribución y el transporte de la cosecha de café, mientras que pequeños cultivadores colonizaban las laderas de los Andes. Esos *paisas* –el nombre que se dan a sí mismos los agricultores de Antioquia– estaban unidos por una tenaz ideología regional-chovinista: conservadurismo católico, trabajo duro, piel clara, identificación frente a los «perezosos» e indisciplinados indígenas y afrocolombianos del Sur².

¹ Número de homicidios en 2005 por cada 100.000 habitantes. Washington DC, 45; Baltimore, 42; Detroit, 42; Medellín, 32,5.

² Véase Nancy Appelbaum, *Muddied Waters. Race, Religion and Local History in Colombia, 1848-1946*, Durham (NC), 2003, pp. 31–51.

Las quiebras bancarias de fin de siglo llevaron a los comerciantes de café *antioqueños* a diversificar sus negocios y pasar del monocultivo del café, tan vulnerable a los colapsos de precios en el mercado internacional, a la industria ligera. Desde un principio, la industrialización en Medellín se desarrolló a partir de iniciativas empresariales y formación de capitales locales, más que como consecuencia de la inversión o licencias estadounidense. A principios del siglo xx Antioquia –que salió prácticamente indemne de la guerra civil durante tres años de 1899-1902, conocida como Guerra de los Mil Días– se había convertido en el centro de la vida económica nacional y Medellín en un importante centro de inversión, especulación y acumulación de valor. El *boom* del café, junto con el rápido crecimiento industrial, espoleó la expansión urbana: la población de Medellín se duplicó llegando hasta 100.000 habitantes en las dos primeras décadas del siglo xx, y la organización y ocupación del espacio urbano se alteró de forma espectacular al adoptar conscientemente las elites paisas una ideología modernizadora.

La planificación urbana se institucionalizó en 1899 –treinta años antes de que se constituyera la Asociación de Planificación Regional de la Ciudad de Nueva York– mediante la Sociedad de Mejoras Públicas promovida por los hombres de negocios de la ciudad. La SMP estableció contratos municipales para la construcción de parques, carreteras y barriadas y organizó la pavimentación del cañón de Santa Elena. En 1897 se construyó una central eléctrica y en 1898 se instaló la iluminación de las calles. En 1889 se añadió una escuela de ingeniería a la primera universidad de la ciudad, fundada en 1871. Medellín contó con un matadero regulado en 1911, con el tratamiento de las aguas residuales en 1913 y con tranvías en 1919³.

El corporativismo católico

Sin embargo, lo más decisivo para el subsiguiente desarrollo de Medellín fue su floreciente industria textil. Don Emilio Restrepo fundó la primera hilatura de algodón de la región en 1905, convirtiendo la ciudad aleña de Bello en un barrio industrial periférico de Medellín. La mano de obra inicial consistía principalmente en chicas del campo circundante. Las fábricas textiles ofrecían una ocupación «respetable» bajo la protección patriarcal de empresas familiares y de la Iglesia católica. Los jesuitas –siguiendo la *Rerum Novarum* de León XIII– ejercieron una importante influencia sobre la primera generación de esa nueva clase obrera en formación, que disfrutaba de salarios relativamente altos, prestaciones complementarias y legislación laboral. Al mismo tiempo, la migración desde los municipios

³ Fernando Botero Herrera, *Medellín, 1890-1950. Historia urbana y juego de intereses*, Medellín, 1996, pp. 30-63. *El Espectador*, el principal diario liberal de Colombia, fue fundado en Medellín in 1887, para trasladarse permanentemente a Bogotá en 1923.

cafeteros del Sur y el Sureste de Antioquia fue un elemento clave de la formación de la cultura política de Medellín, aportando una pauta de clientelismo paternalista al nuevo tejido industrial.

Los empresarios industriales de la ciudad, encabezados por los Restrepo y los Echeverría, ejercían una autoridad personalizada, reproduciendo formas de dominación propias del servicio doméstico. La Acción Social Católica influyó sobre la gestión del imperio empresarial de Don Jorge Echeverría –cuyas dos principales empresas eran Coltejer (fundada en 1907) y Fabricato (1923)– insistiendo en la «obediencia y lealtad personal absoluta» para configurar unas pautas de conducta obrera basadas en los lazos personales con los patrones y una ejecución pronta y eficiente de sus órdenes. La elite y la clase media católica adoptaron una ideología de caridad privada y buenas obras, como obligaciones de los benefactores sociales hacia unos trabajadores percibidos como inferiores. Cuando los trabajadores se organizaron de modo autónomo –como en la oleada de huelgas encabezada por los comunistas a mediados de la década de 1930– fue aplastada sin piedad.

La expansión de la ciudad fue gestionada en gran medida desde la SMP, que regulaba el espacio urbano, prohibiendo por ejemplo el transporte mediante recuas de caballerías para dar paso a los tranvías, automóviles y bicicletas; mulos, burros y ganado se vieron así obligados a permanecer fuera de la ciudad. La SMP supervisó la construcción de barrios para las clases media y obrera y derribó partes históricas del centro para hacer sitio a nuevos edificios y bloques de oficinas. También presionó a los terratenientes para convertir áreas rurales de la ciudad en tejido urbano. Durante las décadas de 1920 y 1930 se fue renovando la Avenida de la Playa con el fin de facilitar la circulación de tranvías y automóviles para trasladar a obreros y profesionales de clase media al trabajo desde los barrios periféricos. El régimen de desarrollo regional de Antioquia –industrialización, redes de transporte y comunicaciones y reestructuración urbana– sirvió como modelo para el resto del país entre 1904 y 1920, cuando las elites estatales decidieron transformar su influencia económica en ventajas políticas nacionales. La burguesía cafetera invirtió en la banca, la industria y la propiedad inmobiliaria, convirtiéndose en expertos especuladores.

La industrialización mediante sustitución de importaciones y la producción para el mercado nacional fueron los apoyos gemelos de ese sistema en el período de posguerra. La industria ligera –refrescos, textiles (lana y algodón), alimentos, dulces, cigarrillos, empaquetado de café–, fue protegida frente a la competencia por altos aranceles sobre los artículos importados, fue subvencionada por generosos préstamos del gobierno y condiciones crediticias favorables, y se benefició por el desarrollo de las infraestructuras. La inversión en la industria se coordinó con la política económica del Estado, especialmente desde mediados de la década de 1940. La fabricación de tejidos de algodón en Medellín se convirtió en «la

joya de la corona» de la vía colombiana a la modernización⁴. Los dirigentes de la ciudad impulsaron activamente la formación de ANDI (Asociación Nacional de Industriales [más tarde Asociación Nacional de Empresarios de Colombia]) y de FEDECAFÉ (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia), como poderosos consorcios nacionales para promover sus intereses de clase.

El paternalismo industrial –nacido como «protector» autoproclamado de la virginidad de las jóvenes obreras de la ciudad– se renovó en las décadas de 1940 y 1950, cuando una segunda generación de fabricantes industriales tomó las riendas de sus empresas familiares. Los Restrepo y los Echeverría se convencieron de que la fábrica industrial moderna se podía convertir en un «mecanismo para evitar la propagación de la agitación comunista en Colombia» y en «un modelo para el conjunto de la sociedad»; éste iba a ser el nuevo estilo de la oligarquía⁵. Las mujeres fueron sistemáticamente apartadas de los trabajos fabriles, con la misma rapidez con que habían sido reclutadas treinta años antes, y sustituidas por «cabezas de familia» varones. Para los trabajadores del textil, que constituían una pequeña minoría, relativamente privilegiada, del proletariado de Medellín, los salarios eran lo bastante altos como para permitirles el consumo de artículos nacionales e importados; las prestaciones complementarias incluían vacaciones, seguro de enfermedad y escolarización. A diferencia de otros centros industriales colombianos –Barrancabermeja, Barranquilla, Cali, Santa Marta– los sindicatos creados en Medellín no dieron lugar a una política independiente de clase. Aparte de la Unión de Trabajadores Colombianos (UTC) fundada en 1946 y dirigida por los jesuitas, la clase obrera estaba muy fragmentada. Ésta fue la edad de oro para la elite comercial e industrial de Medellín. En 1947 la revista *Life* consideraba la ciudad un «paraíso capitalista». El «Manchester de Colombia» tenía rascacielos, cines y teatros, amplias avenidas, parques y monumentos, escuelas y universidades, bulevares comerciales para los peatones y viandantes y un sistema de ferrocarril local, así como innumerables iglesias bien dotadas, cuyos edificios destacaban en cada barrio. El clima ecuatorial de montaña de la ciudad, con una temperatura que rondaba los 22°, prometía una «eterna primavera».

Aun después del asesinato del dirigente populista liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, cuando gran parte de Colombia se sumergió en el mortífero conflicto civil denominado «La violencia» que barrió cualquier esperanza de apertura al reformismo de izquierda en el terreno político sancionado por el Estado, Medellín quedó a salvo de la matanza general⁶. En términos de tasa de beneficio y colaboración de clases, la economía de la ciudad siguió funcionando sin trabas, y en 1947 y 1949 la producción in-

⁴ Ann Farnsworth-Alvear, *Dulcinea in the Factory. Myths, Morals, Men, and Women in Colombia's Industrial Experiment, 1905-1960*, Durham (NC), 2000, p. 14.

⁵ *Ibid.*, pp. 14, 53.

⁶ Para un análisis más detallado, véase mi artículo «La hora crítica» en *NLR* 23 (noviembre-diciembre 2003), pp. 47-90.

dustrial superó registros anteriores. Los fabricantes industriales paisas, aunque apoyaban al presidente conservador Mariano Ospina y desde 1950 al más derechista Laureano Gómez, prohibieron la propaganda partidaria política en sus fábricas durante «La violencia», por más que aprobaran tácitamente los asesinatos en los municipios circundantes⁷. Los inmigrantes que encontraban empleo en las fábricas durante este periodo seguían proviniendo de las zonas cafeteras del centro y suroeste de Antioquia, donde «La violencia» era menos intensa y los partidarios del liberalismo no perdían necesariamente su empleo. La elite de Medellín, dirigida por los Echeverría y la ANDI, fomentó deliberadamente una imagen de la ciudad como «oasis» de productividad capitalista pacífica, beneficiosa para la nación, que había que agradecer a la responsabilidad social de sus principales empresarios industriales. Éstos respaldaron plenamente el acuerdo conocido como Frente Nacional, firmado en 1957, por el que los dos principales partidos de la clase dominante, el liberal y conservador, se comprometían a turnarse en el poder.

Pero los límites del modelo antioqueño eran demasiado evidentes. Cada sector –textil, cigarrillos, cerveza, chocolate– seguía sometido al monopolio de una sola familia, y la industria nunca pasó de la producción de bienes de consumo ligeros a la de bienes pesados y maquinaria. La inversión de capital dependía en último término de los beneficios del café reciclados como subvenciones para la industria a través de un fondo de desarrollo nacional del Estado. El esperado efecto-riqueza que debía filtrarse hacia abajo quedó en realidad muy restringido, traspasando apenas las capas superiores de los empleados del textil cuando se trataba de convertir a los trabajadores en consumidores. Cuando los precios del café cayeron durante el largo declive de las décadas de 1960 y 1970 y las economías de Asia oriental –Taiwán, Hong Kong– se convirtieron en competidores imbatibles en cuanto a la ropa barata y los artículos de consumo más corrientes, los días de Medellín como paraíso capitalista estaban contados.

Al mismo tiempo, la subdivisión de las parcelas agrícolas heredadas, combinada con el aumento de la población y un largo declive del precio del café, contribuyó a empeorar la pobreza en el campo. El número de los que llegaban la ciudad en busca de empleo se incrementó notablemente desde mediados de la década de 1960. En las verdes riberas a ambos lados del río Medellín, especialmente en el valle septentrional de Aburrá, comenzaron a proliferar laberintos de chabolas construidas a mano a partir de ladrillo barato, madera, bloques de hormigón o *bareque* [palos entretrejidos con cañas y barro], interconectados mediante empinadas cuestas escalonadas. Su expansión fue la consecuencia inevitable del obstinado rechazo de la elite a cualquier asomo de reforma agraria. Al cabo de unas décadas esas villas-miseria de rápido crecimiento alojaban a la mitad de

⁷ Véase Mary Roldán, *Blood and Fire. La Violencia in Antioquia, 1946-1953*, Durham (NC), 2003.

la población de la ciudad, de 2,2 millones de habitantes. Las escasas aportaciones del Estado eran canalizadas a través de comités de barrio denominados Juntas de Acción Comunal; pero la demolición a cargo de la policía y unidades del ejército de los nuevos asentamientos en los cerros no hacía sino evidenciar la crisis de autoridad originada en las nuevas fronteras de la ciudad.

Entretanto, mientras el empleo industrial se estancaba, una capa creciente de jóvenes urbanos de clase media baja y obrera afrontaba un futuro sin empleo. El desbordado sistema público universitario contribuyó a producir una nueva capa de clase media con educación superior pero carente de cualquier perspectiva de seguridad profesional⁸. Las esperanzas generadas por la economía industrial durante las primeras décadas de posguerra en cuanto a la movilidad social, mejora en el alojamiento, educación, sanidad y condiciones de trabajo se desvanecieron para las generaciones posteriores por la crisis del modelo antioqueño. Durante la década de 1970, mientras los habitantes de los nuevos barrios de Medellín se organizaban y requerían la mejora de los servicios públicos, un joven proletariado sin empleo añadía un matiz insurgente a las movilizaciones. Las guerrillas rurales, restos de una izquierda marginada pero resistente y muy enraizada, habían constituido una característica permanente del panorama político colombiano desde la década de 1950; a mediados de la siguiente se constituyeron formalmente las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), y a finales de la de 1970 comenzó a hacerse ver también una amplia izquierda urbana a medida que convergían las redes obreras, estudiantiles y guerrilleras. La represión que descargó sobre todas esas organizaciones el Estado fue brutal, con miles de sindicalistas y líderes comunales de izquierda detenidos, apaleados o asesinados. Los acuerdos del Frente Nacional excluían a las fuerzas de izquierda de la representación política oficial; en 1970 la participación en las elecciones cayó al 20 por 100. La protesta popular cobró cada vez más la forma de una insurrección radical, destinada a derrocar el fracasado modelo social del Frente.

El ascenso del narcocapital

Entre las fuerzas más dinámicas que compitieron por la sustitución de ese modelo en Medellín durante las dos décadas siguientes estaba la «clase ascendente» de los traficantes y hombres de negocios de la importación-exportación, que se nutrían de la economía informal. El contrabando de artículos baratos –ropa, cigarrillos– desde la zona libre de impuestos de Panamá eludiendo los altos aranceles a la importación se iba a demostrar como una alternativa lucrativa a la producción nacional y un medio

⁸ Marco Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994*, Bogotá, 1995, p. 298.

efectivo para blanquear dinero. Pablo Escobar, hijo de un campesino y una maestra de escuela crecido en un barrio anodino de Medellín, participó en esas actividades de contrabando desde muy pequeño. Echó los dientes como joven matón en las «guerras del Marlboro» de principios de la década de 1970, cuando bandas rivales competían por el negocio de los cigarrillos de contrabando. Esos grupos dieron lugar a las diversas redes entrelazadas del comercio de cocaína –compra, procesado, líneas de crédito, transporte– que acabarían conociéndose como el cártel de Medellín, cuyos largos tentáculos iban desde la región cafetera hasta las fronteras tropicales del este y la costa atlántica al norte⁹. Escobar y otros contribuyeron a financiar proyectos infraestructurales como la construcción de carreteras y aeropuertos para facilitar el desarrollo del nuevo sector económico.

Los gustos ostentosos y la jactanciosa violencia de esa *clase emergente* de nuevos ricos ofrecía un contraste espectacular con la santurronería, conservadurismo y tacañería de los oligarcas tradicionales de Medellín. Entre las familias dominantes de la ciudad, en un primer momento sólo los Ochoa, bajo el liderazgo patriarcal de El Gordo, saltaron el muro entre el dinero viejo y el nuevo. Las compras de terrenos eran el método preferido para blanquear las montañas de narcodólares. Escobar y otros como él compraron grandes predios de terrenos ganaderos en las tierras bajas tropicales del norte de Antioquia y del valle del Magdalena medio, donde el valor de la tierra bajó cuando los rancheros huyeron de la amenaza de los secuestros y la extorsión de las FARC. El padre del actual presidente de Colombia, Alberto Uribe Sierra, un pariente pobre de los Ochoa, fue un intermediario clave en esas transacciones inmobiliarias y pronto se convirtió él también en un importante propietario. Mientras el dinero de la cocaína ayudaba a inflar la burbuja inmobiliaria en la que el capital local, liberado del desarrollo industrial, podía hacer inversiones más lucrativas, la influencia económica y política del cártel se vio reforzada por su alianza con la vieja oligarquía.

Los magnates del narcotráfico de Medellín y su entorno, acostumbrados a llegar en helicóptero a sus nuevos dominios, se convirtieron en objetivo de los secuestros y la extorsión de los guerrilleros locales. Su respuesta consistió en reclutar sus propios escuadrones de la muerte y ejércitos privados, así como en reclamar una política de contrainsurgencia más dura desde el Estado. En 1981 Escobar y otros traficantes se reunieron con oficiales del ejército, la policía y jefes de partido para organizar el MAS (Muerte A los Secuestradores). También dirigieron sus asesinatos a sueldo contra los seguidores de las FARC y otros izquierdistas en el propio Medellín, hundiendo la ciudad en una espiral asesina. La elite del narcotráfico acabó imponiendo su propia solución a la crisis social de Medellín, con un precio terrible. El narcocapital sirvió de puente para pasar del mo-

⁹ Germán Castro Caycedo, *En Secreto*, Bogotá, 1996, pp. 283-284.

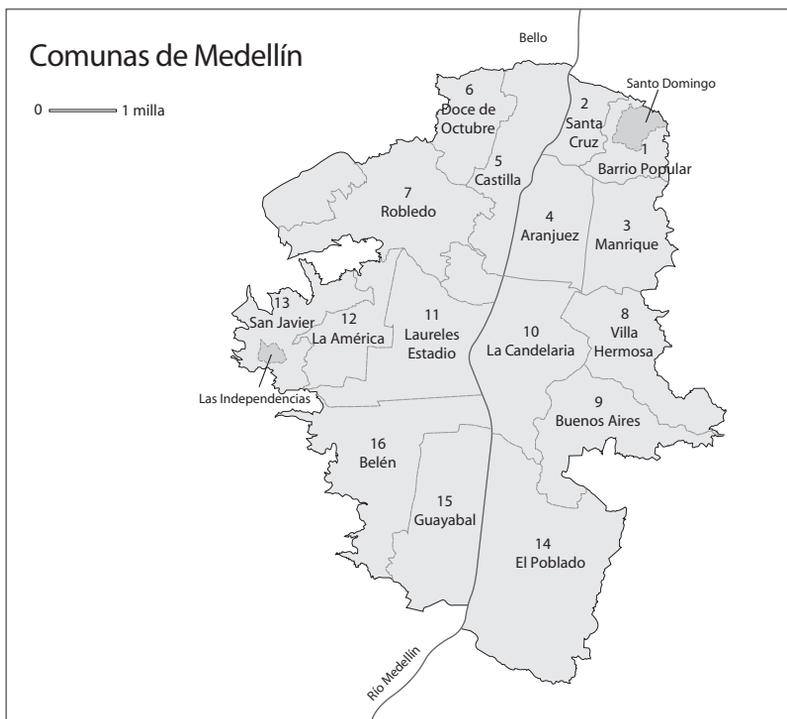
delo industrial a la reconversión de la «Nueva Economía» basada en las finanzas, la propiedad inmobiliaria y los servicios, aunque el propio Escobar tuviera que ser sacrificado en el curso del proceso.

El ascenso de los contrabandistas a los puestos de mayor influencia política en Medellín –y en el conjunto del país– encontró cierta oposición. Los primeros pasos de la carrera del presidente Uribe son instructivos a este respecto. Aunque se jacta de haber obtenido en 1993 un título de Gestión y Administración en Harvard, en 1970, cuando tenía dieciocho años, se le concedió una «exención especial» para no tener que pasar por los exámenes finales en el instituto Jorge Robledo de Medellín. Mientras los ingresos de su padre se multiplicaban gracias a la compraventa de terrenos, Uribe escaló rápidamente en la jerarquía de la autoridad municipal: en 1976, a la edad de veinticuatro años, fue nombrado director de la oficina inmobiliaria del Departamento de Obras Públicas de Medellín, y tras breves períodos en el Ministerio de Trabajo y en el Departamento de Aviación Civil –donde estaba a cargo de la concesión de licencias de piloto para la flota de aviones con los que realizaba sus operaciones Escobar– fue elegido alcalde de Medellín en 1982, a cambio de la contribución de su padre a la campaña presidencial de Belisario Betancur, pero no consiguió hacerse aceptar por algunos de los políticos tradicionales de Antioquia. Al cabo de cinco meses, Uribe –que se valió abiertamente de la organización de Escobar cuando su padre fue asesinado, supuestamente por las FARC, en 1983– fue destituido del puesto de alcalde por el presidente Betancur, tras ser acusado de participar en una cumbre de narcotraficantes del cartel de Medellín.

Escobar, que se había ganado muchos enemigos políticos con su actitud populista, fue expulsado del Partido Liberal en 1982 por quienes denunciaban la influencia de los narcotraficantes en los aledaños del poder. Muchos respaldaban la demanda de extradición presentada contra él por la DEA estadounidense. Los escuadrones de la muerte de Escobar respondieron con bombas y asesinatos de los que pedían su extradición: periodistas, profesores de universidad, y activistas de derechos humanos... Bajo su influencia, la involución de los barrios obreros de Medellín dio un nuevo giro: el crimen organizado ligado a la producción y distribución de narcóticos proporcionaba empleo en abundancia a los jóvenes proletarios sin perspectivas de educación o de trabajo asalariado, ofreciéndoles oportunidades inauditas de movilidad social mediante una versión puesta al día de los valores que suscribía el corporativismo católico.

Las bandas locales implicadas en el robo de automóviles, el tráfico de drogas y la extorsión –los Priscos en Aranjuez, La Ramada en Bello, Quika en Castilla– se integraron en las redes que rodeaban a Pablo Escobar y al cártel de Medellín. Éste, al poner a trabajar *en masse* a los jóvenes delincuentes, contribuyó enormemente a la especialización y profesionalización de las bandas de Medellín, lo que quizá fue su legado más duradero. Aunque desde la década de 1960 había bandas en la ciudad, sus ac-

tividades nunca habían afectado directamente a la vida cotidiana. Ahora bloquearon los procesos de autoorganización comunal —en torno a cuestiones de alojamiento, cuidados sanitarios, educación y mejor empleo— haciendo casi invivibles muchos de los barrios de los cerros periféricos. La participación ciudadana se redujo al patronazgo para quienes podían permitírselo y agravios y temor para el resto.



Ejércitos de la izquierda

En un desarrollo paralelo, desde mediados de la década de 1980 se produjo la formación de milicias populares independientes, en un primer momento bajo la supervisión de activistas comunales de izquierda y antiguos dirigentes guerrilleros. Unidas por una perspectiva genéricamente insurreccional y de izquierdas, pretendían erradicar las bandas y el crimen de sus barrios mediante la lucha armada e instituir su propia forma de autoorganización. Los inmigrantes asentados en las comunas del nordeste organizaron desde 1985, con la ayuda de ex guerrilleros y militantes del M-19, una milicia de autodefensa conocida como Los Capuchos [enmascarados], y en los barrios cercanos surgieron otras milicias de izquierda. Las negociaciones con la guerrilla rural iniciadas por el gobierno Betancur a principios de la década de 1980 permitieron el establecimiento de «Campamentos de Paz» seguros, que desempeñaron un importante papel

en la educación y entrenamiento de las milicias populares. A partir de las bandas juveniles preexistentes, de estructura flexible y configuración cambiante, el ELN en el nordeste y las FARC en Comuna 13 y otros distritos de la zona oeste emprendieron su reestructuración con vistas a la insurgencia armada¹⁰. Antes de que el Estado interviniera contra ellas, las milicias populares consiguieron derrotar a las bandas criminales de pequeño y medio tamaño, dedicándose, al menos en teoría, a fortalecer el poder de las comunidades; sus actividades incluían proyectos de mejora, limpieza, pavimentación, pintura, deportes y esparcimiento, así como patrullas nocturnas y la resolución de las disputas domésticas y vecinales.

A mediados de la década de 1980 también se formó una nueva alianza de la izquierda en sentido amplio, la Unión Patriótica, un proyecto conjunto de las FARC y el Partido Comunista Colombiano que durante un tiempo sirvió como centro de encuentro para los radicales urbanos de todas las tendencias ideológicas. Aunque en Medellín no fuera tan fuerte como en otros lugares, la UP ofreció la esperanza de una resistencia coordinada contra la vieja oligarquía y la nueva clase gansteril; pero al estar organizada abiertamente, también exponía a sus seguidores a la violenta represión de la derecha. En Antioquia, como en otros lugares, fueron asesinados estudiantes, profesores, periodistas, abogados y especialmente sindicalistas y activistas campesinos participantes en la alianza. La UP fue destruida, no como consecuencia de sus deficiencias internas, por reales que éstas fueran, sino porque no pudo resistir el prolongado terror de la derecha dirigido contra ella.

El resultado inmediato de esta represión fue un fortalecimiento de los grupos armados de la izquierda. Como respuesta al deterioro de la situación política y de seguridad, a finales de la década de 1980 se aceleró el crecimiento de las milicias populares; muchos de sus comandantes disfrutaban de amplia legitimación y apoyo popular¹¹. Si el temor del antiguo gobernador Gilberto Echeverry a una conquista comunista de la ciudad, expresado en una carta al presidente liberal César Gaviria, parece cómicamente exagerada —especialmente a la luz de los desplazamientos planetarios que se estaban produciendo en aquella época—, la proliferación de microsoberanías, ejercidas en nombre del «pueblo», era muy real¹².

¹⁰ Ramiro Ceballos Melguizo, «The Evolution of Armed Conflict in Medellín. An Analysis of Major Actors», *Latin American Perspectives* núm. 116, XXVIII, 1, p. 113. Entrevistas con abogados, periodistas, activistas vecinales y antiguos líderes de la guerrilla, Medellín, Colombia, 2000-2002. Véanse también William Estrada y Adriana Gómez (eds.), *Somos historia. Comuna nororiental*, Medellín, sin fecha, pp. 65-88, 106-107, 128-133; Alonso Salazar, *No nacimos pa' semilla*, Bogotá, 1990, pp. 86-87.

¹¹ Mary Roldán, «Cocaine and the “Miracle” of Modernity in Medellín», en Paul Gootenberg (ed.), *Cocaine. Global Histories*, Londres, 1999, pp. 165-183.

¹² Citado en Ana Jaramillo *et al.*, *En la encrucijada. Conflicto y cultura política en los noventa*, Medellín, 1998, p. 65, nota 9.

Pero en el contexto del equilibrio genérico de poder las victorias coyunturales de las milicias populares contra las pequeñas bandas de gánsteres sólo podían dar lugar a grupos criminales profesionales más violentos, vinculados estrechamente al narcotráfico y al mismo tiempo a las agencias de seguridad estatales. Para las redes de Escobar, la guerra contra las milicias de izquierda sirvió como laboratorio para la mutación de su banda hacia la concentración, centralización y fusión con los elementos más autoritarios del Estado. Las milicias de izquierda sitiadas comenzaron a su vez a reproducir el comportamiento del Estado autoritario y las prácticas gansteriles contra las que se habían organizado. Fue una evolución parecida –*mutatis mutandis*– a la de los miembros de ETA en el País Vasco o los provos en Irlanda del Norte. En último término, la izquierda armada urbana se iba a ver socavada, no sólo por la represión estatal y el creciente terror gansteril, sino también porque carecía de recursos políticos para combatir esas tendencias en sus propias filas¹³.

A finales de la década de 1980 una amplia alianza de fuerzas dirigidas por el Estado, incluidos muchos de sus antiguos socios en Medellín, se volvió contra el propio Escobar. El catalizador fue el asesinato en 1989 del aventajado candidato liberal a la presidencia, Luis Carlos Galán, que había pedido públicamente la extradición de Escobar a Estados Unidos. Por iniciativa del presidente Virgilio Barco se creó un Bloque de Búsqueda especial, una fuerza operativa compuesta por unidades policiales de elite de fuera de la ciudad –ya que los autóctonos se consideraban poco fiables– para encontrar a Escobar, quien a su vez contrató a un verdadero ejército en las comunas del nordeste y el noroeste de Medellín para hacer la guerra al Estado. En diciembre de 1989 la recompensa por un oficial de policía muerto era de medio millón de pesos (250 dólares); en 1991 se había triplicado¹⁴. En 1990-1991 fueron asesinados en Medellín alrededor de 500 policías y los esbirros de Escobar hicieron estallar alrededor de 150 coches-bomba. Después de que Escobar negociara los términos de su rendición con el gobierno de Gaviria en julio de 1991 –sería encarcelado en «La Catedral», una «prisión» palaciega en el municipio de Envigado construida según sus propias especificaciones y cuyos vigilantes serían sus propios guardaespaldas–, las agencias militares, policiales y de espionaje colombianas lanzaron una feroz oleada de represión contra los habitantes *de las comunas*: cada fin de semana morían entre treinta y cuarenta jóvenes¹⁵. En 1992 Escobar «escapó» y volvió a hacer la guerra al gobierno; por segundo año consecutivo hubo más de seis mil homicidios en Medellín.

Bajo la presión renovada de Washington, el gobierno de César Gaviria y las agencias estadounidenses forjaron ahora una alianza con el cártel de

¹³ Entrevistas con miembros de la guerrilla, Medellín, junio de 1999, mayo de 2000, julio de 2002.

¹⁴ Entrevista con antiguos miembros de La Ramada, Medellín, mayo de 2000.

¹⁵ M. Roldán, «Cocaine and the “Miracle” of Modernity», cit., p. 175.

Cali y con antiguos socios de Escobar en el cártel de Medellín conocidos como Los Pepes, denominada «Perseguidos por Pablo Escobar». Durante 1993 fue Carlos Castaño, un cacique narco-paramilitar y antiguo empleado de Escobar, quien dirigió la campaña contra su ex jefe, utilizando sus escuadrones de combate compuestos por jóvenes gánsteres de Medellín. Aquel año la tasa de homicidios llegó a la cifra terrible de 311 por cada 100.000 habitantes, casi diez veces más alta que hoy día. Castaño iba tras las bandas y socios de Escobar, pero no desaprovechó la oportunidad de golpear a sus principales enemigos, los «comunistas subversivos»¹⁶. Un aliado en aquella persecución fue Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna, jefe de seguridad de uno de los lugartenientes de Escobar antes de cambiar de bando y dirigir sus escuadrones de la muerte contra el *capo di tutti capi*. Escobar fue finalmente asesinado en diciembre de 1993.

Desde la mansión del gobernador

La muerte de Escobar señaló, no el fin de la influencia del narcocapital en Medellín, sino su madurez. En 1995 la influencia de la clase emergente era evidente a tres niveles diferentes: en primer lugar, los vínculos forjados mediante Los Pepes habían reforzado los lazos entre los órganos de seguridad estatales, los narco-paramilitares y las bandas de Medellín. En segundo lugar, el capital de la cocaína blanqueado a través de las agencias inmobiliarias, la construcción y las finanzas se había hecho con el gobierno del departamento de Antioquia en la persona de Álvaro Uribe. Tras servir como concejal en el ayuntamiento de Medellín a mediados de la década de 1980, Uribe fue senador estatal desde 1986 hasta 1994, y en 1995 fue elegido gobernador. Junto con su consejero Pedro Juan Moreno Villa –más tarde denunciado por la DEA por sus sospechosas importaciones de decenas de toneladas de permanganato potásico– intentó ahora introducir las fuerzas paramilitares de la industria de la cocaína en el sistema de seguridad estatal colombiano mediante una reorganización del Ministerio de Defensa, en la cual se pretende insertar a las cooperativas privadas «de seguridad y vigilancia», denominadas Convivir, y que se hallaban respaldadas por el ejército y la policía colombianos. Esos escuadrones de la muerte fuertemente armados, financiados por la empresa privada pero que desde que Uribe llegó a la mansión del gobernador contaban con «el apoyo y sanción legal del Estado», gozaban de una impunidad casi total; los asesinatos de activistas de los derechos humanos y líderes obreros se multiplicaron¹⁷. En Antioquia y Córdoba Convivir coincidía en gran medida con las «Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá», esto es,

¹⁶ Alonso Salazar, *La parábola de Pablo*, Bogotá, 2002, pp. 307–314. Castaño fue el fundador de ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), una organización paramilitar que pretendía recuperar el territorio en manos de las FARC.

¹⁷ M. Roldán, «Cocaine and the “Miracle” of Modernity», p. 178. Véase también Joseph Contreras, *Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. El señor de las sombras*, Bogotá, 2002, pp. 120–146.

con los paramilitares de Castaño. Tan sólo en Medellín funcionaban siete unidades de Convivir¹⁸.

Un tercer acontecimiento contribuyó a cimentar el nuevo orden en la calle desde mediados de la década de 1990. Tras la muerte de Escobar Don Berna heredó la «oficina de Envigado» de asesinos especializados¹⁹; ahora emprendió la formación de una banda de bandas conocida como La Terraza, con base en Manrique, una de las comunas más brincas del nordeste de la ciudad. La Terraza pronto controlaba una porción sustancial del crimen organizado en Medellín –asesinatos por encargo, atracos armados, extorsión, juego, prostitución, venta de drogas al por menor–, y también coordinaba las exportaciones de cocaína a través de Urabá, aprovechando la relación que Don Berna había establecido con Carlos Castaño en los días de Los Pepes. Los líderes de las bandas negociaban ahora acuerdos formales con el gobierno municipal de Medellín a través de la «Oficina para la Paz y la Coexistencia» recién creada. Para muchos, esto significaba simplemente unirse a Convivir. La alianza resultante entre Don Berna y Castaño constituía un cuasi monopolio de la violencia. Los matones de Don Berna estaban organizados en el Bloque Cacique Nutibara; los de Castaño, bajo el mando del cabecilla local «Rodrigo Doble Cero» –otro veterano de Los Pepes–, en el Bloque Metro. Esos dos grupos, mediante ofertas que los líderes de bandas locales no podían rechazar, habían conquistado en 2002 el 70 por 100 de la ciudad. Las bandas que pretendían mantenerse fuera se vieron obligadas a pagar un tributo o a desaparecer por completo.

A pesar de todo, las bien armadas guerrillas izquierdistas seguían controlando reductos sustanciales en los barrios degradados del nordeste y el oeste de Medellín²⁰; la Comuna 13 seguía siendo una fortaleza inexpugnable. En mayo de 2002, después de que la policía municipal fuera repelida a tiros, las fuerzas estatales lanzaron una ofensiva militar contra la Comuna 13, cuyo nombre en clave era «Operación Mariscal», pero las tropas

¹⁸ Astrid Mireya Téllez Ardilla, *Milicias Populares. Otra expresión de la violencia social en Colombia*, Bogotá, 1995, p. 107. Véase también Fernando Cubides, «From Private to Public Violence. The Paramilitaries», y Gonzalo Sánchez, «Introduction. Problems of Violence, Prospects for Peace», ambos en Charles Bergquist *et al.* (eds.), *Violence in Colombia, 1990-2000. Waging War and Negotiating Peace*, Wilmington, 2001, pp. 131, 11.

¹⁹ Aunque esa banda de asesinos ya no existe oficialmente, entrevistas con traficantes en Medellín en diciembre de 2004, abril y agosto de 2005 y junio de 2006 daban a entender que todo seguía poco más o menos igual.

²⁰ En 1994 unos 800 milicianos –no integrados en las FARC ni en el ELN– llegaron a un acuerdo con el gobierno de Gaviria, por el que los antiguos líderes de la milicia fueron reconocidos como jefes de seguridad en sus propios vecindarios, dentro de una estructura conocida como Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom). Los milicianos vinculados a las FARC y el ELN se unieron entonces para ocupar el territorio desmovilizado, mandando a varios cientos de miembros de Coosercom. En 1996 el gobierno intentó disolver Coosercom alegando su comportamiento gansteril. Pese a esa experiencia tan poco alentadora, se volvió a intentar un «proceso de paz» semejante con las bandas criminales. Véase Sánchez, «Introduction», Ch. Bergquist *et al.* (eds.), *Violence in Colombia*, cit., p. 11.

tuvieron que retirarse después de que un intenso combate casa por casa no hubiera conseguido quebrar la resistencia de las milicias. Tras la elección de Uribe como presidente, no obstante, se lanzaron nuevos asaltos masivos. A finales de 2002 y principios de 2003 las operaciones Orión y Estrella VI del Ejército contra la Comuna 13 fueron coordinadas, al parecer, con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara y del Bloque Metro, que permanecían en retaguardia para ocupar los territorios conquistados. A finales de 2003 Don Berna se había hecho con el control de todas las bandas de la ciudad, y con la ayuda de su red de contactos en las agencias de seguridad del Estado derrotó al resto de las milicias de izquierda junto con el Bloque Metro, que ahora se había convertido en un lastre; en mayo de 2004 el Bloque Cacique Nutibara mató a Doble Cero²¹. Así se estableció un nuevo orden en Medellín.

La cocaína y la nueva economía

En *The Origins of Dictatorship and Democracy* Barrington Moore describió el feudalismo europeo como «un gansterismo que se había convertido en la propia sociedad». La trayectoria de Don Berna, de pistolero contratado a padrino de la mafia y «pacificador» de Medellín, resume la refeudalización del poder en la economía neoliberalizada de Colombia, sostenida por los beneficios de la cocaína tal como el antiguo modelo industrial se había basado en el café. Esta fusión entre política, propiedad y crimen organizado, reflejada en el control de los paramilitares sobre la seguridad para la inversión de capital, vincula los viejos malos días de la ciudad con los nuevos y buenos y determina en gran medida el presente y futuro aspecto del entorno construido. Después de la victoria de Don Berna las tasas de homicidios y delitos violentos cayeron precipitadamente, aun si se tienen en cuenta los primeros enterramientos en masa descubiertos en el centro-oeste y el nordeste de la ciudad. A finales de la década de 1990 fuerzas de seguridad públicamente respaldadas limpiaron una extensa zona del centro de la ciudad, dominada por un barrio de prostitución y el mercado al aire libre en el extremo norte y una calle de salones gay al oeste. Matones contratados amenazaron, desplazaron asesinaron a los habitantes «prescindibles» del distrito –vendedores de drogas, adictos, prostitutas, niños de la calle, pequeños rateros, llamados desechables– a fin de dejar sitio para el desarrollo urbano. A partir de 2000 esa campaña de «pacificación» de toda la ciudad fue apoyada por las fuerzas de seguridad del Estado, hombres de negocios, políticos de ambos partidos y la Iglesia católica.

La «pacificación» es la condición para hacer posibles las muy pregonadas mejoras en el turismo, la inversión y la seguridad. Don Berna, atribuyén-

²¹ Adam Isacson, «Plan Colombia. Six Years Later», Centre for International Policy, noviembre de 2006.

dose el mérito, explicaba que sus sicarios entendían la necesidad de crear «el clima necesario para que regrese la inversión, en particular la inversión extranjera, algo fundamental si no queremos que nos deje atrás el motor de la globalización»²². Aunque siguiera al frente de la extorsión, los asesinatos por encargo, el juego, la venta de drogas, etcétera, Don Berna también tenía una participación importante en la construcción, los transportes, las ventas al por mayor y al por menor, las finanzas, la moda, la seguridad privada, el desarrollo inmobiliario y la televisión por cable. En las elecciones de 2004 treinta de los candidatos de Don Berna obtuvieron puestos como cabezas de asociaciones vecinales, las Juntas de Acción Comunal. Se presentaron con una ONG llamada Corporación Democracia, dirigida por Giovanni Marín, alias «comandante R», un carnicero convertido en ideólogo que se presentó al congreso en 2006. Según Marín, «mi conciencia está limpia. La gente debería saber que colaboramos a pacificar la ciudad; que entregamos una ciudad en paz»²³.

El proceso de pacificación de Don Berna coincidió con la abrumadora victoria electoral del alcalde Sergio Fajardo en 2003. A primera vista, el contraste entre el *modus operandi* de uno y otro difícilmente podría ser mayor. Fajardo es un columnista educado en Estados Unidos (con una tesis doctoral en matemáticas por la Universidad de Wisconsin-Madison), que viste vaqueros y exhibe en los medios una personalidad de centroizquierda, no contaminada por la identificación con los partidos políticos tradicionales. Su apoyo es más fuerte en la clase media, pero es asombrosamente alto: alrededor del 90 por 100, frente al 70 por 100 estimado para el presidente Uribe. A sus partidarios les complace señalar la falta de corrupción relativa de Fajardo: su contabilidad es transparente y el presupuesto está abierto a la participación popular. Al respecto cabría hacer algunas matizaciones: la familia de Fajardo es propietaria de una de las mayores empresas de construcción y cemento de Colombia, que supuestamente se está beneficiando de contratos sin competencia para construir viviendas de lujo en El Poblado, el barrio más acomodado de la ciudad.

Fajardo también ha emprendido un programa de obras públicas espectaculares, muchas de ellas destinadas a los barrios degradados de los cerros donde el Estado ha estado siempre ausente o sólo se ha manifestado como puño de hierro. Un ambicioso proyecto denominado «Medellín, la más educada», supondrá la construcción de seis parques públicos y complejos de bibliotecas en áreas como las *comunas* del oeste y nordeste de la ciudad, junto con diez nuevas escuelas a las que acudirán 20.000 estudiantes, con un coste total de 1.600 millones de dólares. Como demuestra el mapa de las escuelas y parques-bibliotecas, el gobierno de la ciudad está estableciendo por primera vez una presencia no represiva en

²² Citado en Amnesty International, «The Paramilitaries in Medellín. Demobilization or Legalization?», septiembre de 2005, p. 35. www.amnesty.org.

²³ Citado en Javier Sulé, «Medellín orgulloso», *El País* (Madrid), mayo de 2006.

comunas largo tiempo disputadas por bandas, milicias y narco-paramilitares; pero el complejo de bibliotecas en Las Independencias, en la parte oeste de la ciudad, parece una prisión: compuesto por seis secciones de dos pisos, unidas por escaleras, en las que largas barras de metal negro separan las anchas ventanas en el frente de cada bloque de barracas de color gris. La biblioteca de Santo Domingo, en la parte nordeste, estará separada por un alto muro de las casas del barrio. Compuesta por dos estructuras negras con forma de vaina, parece una instalación de investigación militar. Ésta es la arquitectura clásica de la pacificación, con funciones de seguridad incorporadas al diseño²⁴.



Proyecto del arquitecto para la biblioteca proyectada en Santo Domingo, Medellín.

El principal objetivo político de los narco-paramilitares ha sido durante mucho tiempo una desmovilización negociada: una «legalización» con la promesa de no ser extraditados a Estados Unidos. Uribe lo había considerado aceptable durante mucho tiempo y en 2005 se firmaron los acuerdos; pero los chicos de Don Berna mataron, quizá irreflexivamente, a un político local que hacía campaña a unos pocos kilómetros de donde su jefe y el representante del presidente se estaban dando la mano. Tras abundantes protestas Don Berna fue detenido por el asesinato, pero sigue ejerciendo un control formidable desde la cárcel. El gobierno municipal de Medellín ofrece desmovilizar a los paramilitares en las mejores condiciones en todo el país, más formación laboral, etc.; también ahí coinciden las agendas del Ayuntamiento y de Don Berna desde su celda en la prisión de Itagüí. En 2006 cerca de cuatro mil paramilitares desmovilizados se habían asentado en la ciudad; pero la principal área de acuer-

²⁴ Mike Davis, *City of Quartz*, Nueva York, 1990, pp. 228, 240, 256-257.

do entre los dos agentes de la reconversión que ha experimentado Medellín sigue siendo la necesidad de adaptar la ciudad a las necesidades y seguridad del capital extranjero. Ya se ha señalado la preocupación de Don Berna por crear un clima favorable para los inversores venidos de fuera; Fajardo se hace eco de la necesidad de «proyectar» la imagen de una «ciudad vibrante, que toma de nuevo su lugar como centro de negocios y destino turístico»²⁵.

¿Un paradigma andino?

Durante más de medio siglo su excepcional modernidad hizo de Medellín un ejemplo para el desarrollo nacional y más allá de las fronteras de Colombia: un «paraíso capitalista» durante la Guerra Fría. La ciudad parece dispuesta a asumir ese papel una vez más. Hace cuatro años sugerí en estas mismas páginas que cuando Álvaro Uribe, oriundo de Medellín y antiguo gobernador de Antioquía, tomó posesión como presidente de Colombia, la gente fuera de la ley se convirtió en respetable. El modelo de Medellín de una dinámica economía de finanzas y servicios basada en el narcotráfico –cuyas míseras chabolas en la periferia brillan ahora bajo la purpurina de un proyecto que pretende venderse como modelo– se ha generalizado a toda Colombia.

Después de tres generaciones de guerra urbana fomentada por la cocaína, Medellín se ha situado ahora en buena posición para convertirse en el vértice de la integración económica con Estados Unidos, vinculando el eje del café del interior andino con las costas del Atlántico y el Pacífico. Desde 1990 se ha venido planificando Antioquia como «el mejor rincón de América» para la inversión de capital a gran escala en la minería, la infraestructura de transportes, megaproyectos como diques y canales, plantaciones de maderas nobles y de palmas oleaginosas. Las elites regionales parecen a punto de alcanzar su sueño, expresado por primera vez durante el *boom* de las exportaciones del café hace más de un siglo, de aunar su capital en las tierras altas con las tierras bajas de los litorales del Caribe y el Pacífico, con el telón de fondo de los proyectos estadounidenses de libre comercio para el continente²⁶.

Pero si la clase dominante de la región ha superado sus escrúpulos en cuanto a recurrir al narcotráfico y a los paramilitares para garantizar las inversiones, los derechos de propiedad y la rentabilidad, esa base no ofrece demasiada consistencia a la legitimidad del nuevo orden. Aunque los jefes paramilitares se hayan portado bien desde el programa de desmovilización de Uribe, los soldados de a pie se han visto devueltos a la lamen-

²⁵ Citado en *El Colombiano*, 20 de agosto de 2005.

²⁶ James Parsons, *Antioquia's Corridor to the Sea. An Historical Geography of the Settlement of Urabá*, Berkeley, 1967.

table situación social de la que pretendían escapar. Más de la mitad de la población de Medellín vive en la pobreza, y tres cuartas partes de los habitantes de las comunas degradadas no llegan al salario mínimo; cerca de un millón carecen de servicios básicos: agua, alcantarillado, electricidad. Los paramilitares descontentos, considerándose estafados por las iniciativas de desmovilización de Uribe, pueden estar dispuestos a hablar de sus tratos con generales, políticos y líderes empresariales. A finales de 2006 la oposición en el Congreso dirigida por el Polo Democrático Alternativo pidió una investigación del Tribunal Supremo sobre una supuesta confabulación de los aliados de Uribe, con la colaboración de los paramilitares, para amañar las elecciones regionales. Fueron detenidos ocho legisladores así como Jorge Noguera, antiguo jefe de inteligencia de Uribe. A finales de marzo de 2007 un agente de la CIA filtró documentos a *Los Angeles Times* que demostraban que el general Mario Montoya, jefe del ejército colombiano que en 2002 estaba al frente de la Operación Orión contra la Comuna 13 de Medellín, había llegado a un acuerdo con uno de los sicarios de Don Berna y un jefe de policía local sobre la planificación y puesta en práctica conjunta de la ofensiva, que había dejado más de catorce muertos y docenas de «desaparecidos».²⁷ En el momento de escribir estas líneas se está desarrollando todavía ese «Para-gate», acercándose cada vez más al propio Uribe. El faro del neoconservadurismo en América Latina arroja un fulgor turbio que nos recuerda que la operación de reconversión de Medellín reposa sobre las tumbas de decenas de miles de sus ciudadanos. La resistencia, no sólo armada, ha sido formidable, lo que explica la sangre y el fuego que se han necesitado para aplastarla.

²⁷ «Colombia army chief linked to outlaw militias», *Los Angeles Times*, 25 de marzo de 2007. Véase también «Colombian rebels threaten to expose political links», *Financial Times*, 1 de marzo de 2007.